



LA PROPIEDAD EN EL ORDENAMIENTO CANONICO

SUMARIO: 1) Consideraciones metodológicas. 2) La Iglesia y la propiedad. 3) La propiedad en el ordenamiento de la Iglesia. 4) La Iglesia como propietaria. 5) El patrimonio eclesiástico: estructura. 6) Disfrute de bienes eclesiásticos por personas físicas. 7) Características de la propiedad eclesiástica.

1) *Consideraciones metodológicas.*

Señalemos en primer lugar los criterios metodológicos escogidos para la redacción de esta ponencia. Así lo aconseja la necesidad de tratar del tema con la mayor brevedad, sin posibilidad de matizar la exposición con aclaraciones que justifiquen en cada caso el ángulo de enfoque elegido para estudiar los diversos aspectos de la cuestión que nos ocupa.

a) Como es sabido, el Derecho canónico está constituido por el conjunto de normas vigentes en el seno de la sociedad eclesiástica¹. La Iglesia Católica es una agrupación de hombres, unidos por unos vínculos de carácter religioso para la consecución de un fin ultraterreno². Posee una organización jerárquica y tiene como punto de cohesión fundamental el asentimiento a un conjunto de enseñanzas (dogmas) reconocidas por verdaderas³. Su ordenamiento jurídico reposa, como es obvio, en esas enseñanzas y encuentra su coherencia doctrinal en la fiel correspondencia a los principios religiosos en que

1. Para una definición del Derecho canónico como conjunto de normas jurídicas, vid.: V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹¹ (Milano 1962) 8-14. Vid. también: P. LOMBARDIA, *Aportaciones de Vincenzo Del Giudice al estudio sistemático del Derecho Canónico*, IVS CANONICVM 2 (1962) 315-325.

2. Sobre la función del fin de la salvación de las almas en el ordenamiento canónico vid.: J. HERVADA, *Fin y características del ordenamiento canónico*, IVS CANONICVM 2 (1962) 5-74 y la bibliografía allí citada.

3. Es clásica la definición de S. ROBERTO BELLARMINO: «Coetus hominum eiusdem christianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione colligatus sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii Romani Pontificis» (*De controversiis: De Eccl. militante*, L. 3, c. 2). Vid.: DEL GIUDICE, *Nozioni...* cit., 49-58.

se apoya. En este trabajo será necesario en ocasiones hacer referencia a algunos presupuestos doctrinales de la legislación canónica sobre el tema. En manera alguna se pretende, sin embargo, hacer cuestión crítica sobre la doctrina católica, sino simplemente, darla por supuesta como elemento imprescindible para comprender el sentido de las instituciones jurídicas a que hemos de referirnos en esta breve exposición. Se prescinde también aquí del estudio del tema en las reglas sociales de otras confesiones religiosas.

b) La Iglesia se proclama una Sociedad provista de soberanía originaria, independiente de la autoridad estatal⁴. Por otra parte, considera que las normas que regulan su actividad social constituyen un verdadero ordenamiento jurídico⁵. Es de todos perfectamente sabido, sin embargo, que los Estados no siempre reconocen la independencia y la soberanía de la Iglesia, sino que consideran como objeto de su poder la regulación de fenómenos sociales de orden religioso; por otra parte, el carácter jurídico del ordenamiento de la Iglesia no es aceptado unánimemente por la doctrina, aun cuando las objeciones que ha propuesto la corriente que lo niega pueden considerarse superadas⁶. En esta ponencia el tema de la propiedad se estudia desde el punto de vista del ordenamiento de la Iglesia, prescindiéndose tanto de las cuestiones polémicas que podrían plantearse a propósito de su carácter jurídico, como del reconocimiento en los ordenamientos estatales de las instituciones que van a ser objeto de análisis. Sólo se aludirá al tema de las relaciones entre ordenamiento canónico y ordenamientos estatales en aquellos aspectos de la cuestión en los que sea posible plantearlo de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica y, siempre, desde el punto de vista del ordenamiento canónico.

4. De esta cuestión se han ocupado todos los manuales y tratados de Derecho público eclesiástico. Cfr., por su reconocida autoridad, A. OTTAVIANI, *Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici* 4 1 (Vaticanis 1958).

5. Para una aplicación de la doctrina del ordenamiento jurídico al Derecho de la Iglesia vid., además de las obras cit. en la nota 1, P. A. D'AVACK, *Corso di diritto canonico*, I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa* (Milano 1956) 129-162.

6. Entre los más recientes trabajos sobre la cuestión vid.: J. MALDONADO, *Acercas del carácter jurídico del ordenamiento canónico*, «Revista española de Derecho canónico» 1 (1946) 67-104; G. FORCHIELLI, *La giuridicità del diritto canonico al vaglio della dottrina contemporanea*, «Studi in onore di Vincenzo Del Giudice» 2 (Milano 1953) 469-532. Un buen resumen de la cuestión con abundante bibliografía en D'AVACK, *Curso... I Introduzione...*, cit., 81-127.

En resumen, no se trata aquí de analizar críticamente los presupuestos doctrinales de la legislación canónica sobre el tema sino, simplemente, de exponer la regulación de la propiedad en el Derecho de la Iglesia.

2) *La Iglesia y la propiedad.*

La Iglesia ha mantenido siempre que la propiedad es una institución de Derecho natural. Así lo afirman los Romanos Pontífices en una serie de importantes documentos del Magisterio ordinario⁷. Destacan por su importancia, entre los más recientes, las Encíclicas "Rerum novarum" de León XIII (1891), "Quadragesimo anno" de Pío XI (1931), y "Mater et magistra" de Juan XXIII (1961). Pío XII se ocupó también, en numerosas ocasiones, de este tema, en escritos de diverso carácter⁸.

La concepción del derecho natural de propiedad según la doctrina de la Iglesia se funda en la consideración de la persona humana como valor metafísico. "Resulta, por tanto, extraña —ha escrito Juan XXIII en la Encíclica "Mater et Magistra"— la negación que algunos hacen del carácter natural del derecho de propiedad, que halla en la fecundidad del trabajo la fuente perpetua de su eficacia; constituye, además, un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica; y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado"⁹. La propiedad privada "por la práctica de todos los tiempos" ha sido consagrada, según León XIII, "como muy conforme a la naturaleza humana así como a la pacífica y tranquila convivencia social"¹⁰ y debe considerarse, según el Pontífice reinante, como un "derecho contenido en la

7. El tema de la propiedad en la doctrina pontificia ha sido objeto de muchos estudios. Recordamos, entre los escritos posteriores a la Encl. «Mater et magistra»: A. DE FUENMAYOR, *La propiedad privada y su función social*, «Nuestro Tiempo» 16 (1962) 299-315; J. RUIZ-GIMÉNEZ, *La propiedad*, «Comentarios a la Mater et magistra» (Madrid 1962) 383-441.

8. Especialmente importante el Radiomensaje de 1 de junio de 1941. Cfr. A.A.S. 33 (1941) 195-205. Traducciones a diversas lenguas ibid. 205-293.

9. Traducción de J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, revisada por Luis Ortiz Muñoz, «Comentarios...» cit., 46.

10. Encl. «Rerum Novarum»; trad. española de P. GALINDO, *Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios*⁴ (Madrid 1955) 356.

misma naturaleza, la cual nos enseña la prioridad del hombre individual sobre la sociedad civil y, por consiguiente, la necesaria subordinación teleológica de la sociedad civil al hombre”¹¹. “Y si el derecho a la propiedad privada —son palabras del Papa León XIII— es debido a la misma naturaleza y no efecto de leyes humanas, el Estado no puede abolirlo, sino tan sólo moderar su uso y armonizarlo con el bien común”¹².

Junto a esta enérgica defensa del derecho de propiedad, el Magisterio de la Iglesia afirma que éste tiene una función social. De aquí la necesidad de que sea regulado por el ordenamiento jurídico que —según ha enseñado Pío XII— “para garantizar el equilibrio, la seguridad, y la armonía de la sociedad, posee también poder coactivo contra los que sólo mediante él pueden ser mantenidos en la noble disciplina de la vida social”¹³.

El equilibrio entre estos dos puntos fundamentales: derecho de propiedad privada, por una parte, y función social de este derecho por otra, con posibilidades por parte de la sociedad y del Estado para intervenir en el régimen jurídico de los derechos sobre las cosas temporales e incluso para desposeer a los particulares, en casos concretos, por exigencias del bien común, está fundado, según la doctrina pontificia, en el principio de subsidiaridad del Estado¹⁴, calificado por Pío XI, como el principio supremo de la filosofía social, inamovible e inmutable¹⁵. Según el Papa Juan XXIII, la acción del Estado “que fomenta, estimula, ordena, suple y completa, está fundamentada en el principio de la función subsidiaria”¹⁶. El mismo Pontífice deduce una importante consecuencia: “la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa,

11. Encl. «Mater et Magistra», trad. citada 44.

12. Encl. «Rerum Novarum», trad. cit., 371.

13. Radiomensaje de 24 de diciembre de 1942; trad. GALINDO, *Colección...* cit. 212.

14. Cfr. entre la más reciente bibliografía: A. MONCADA, *El principio de subsidiaridad*, «Nuestro Tiempo» 16 (1962) 331-347; L. SÁNCHEZ AGESTA, *Iniciativa personal e intervención de los poderes públicos en el campo económico. La «Constitución económica» de los Estados*, «Comentarios» cit., 142-167; J. MESSNER, *La cuestión social*, trad. española (Madrid 1960) 362-371.

15. Encl. «Quadragesimo Anno», trad. GALINDO, *Colección...* cit. 407.

16. Encl. «Mater et Magistra», trad. cit. 22.

salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana”¹⁷.

Esta doctrina, a la que aquí sólo hemos podido referirnos en sus líneas más generales y en sus formulaciones más recientes, ha sido siempre defendida por la Iglesia en sus principios fundamentales y, lógicamente, ha servido de fuente de inspiración a la doctrina de los canonistas y moralistas sobre el tema de la propiedad. En torno a la Iglesia ha surgido una extensa literatura jurídica sobre la propiedad, cuya finalidad es necesario examinar, si queremos determinar con exactitud su preciso alcance¹⁸. Para ello hemos de distinguir claramente dos aspectos:

a) La doctrina de la Iglesia sobre la propiedad tiene un alcance universal. Esta institución se considera de Derecho natural, y, con más precisión, de acuerdo con una terminología familiar a teólogos y moralistas, de Derecho natural secundario¹⁹. De acuerdo con este principio, los moralistas se ocupan del tema para establecer criterios de justicia que puedan servir para valorar, desde este punto de vista, cualquier ordenamiento positivo, ya que la ley positiva, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino, si no concuerda con la ley natural, “non erit lex sed legis corruptio”²⁰. Por otra parte, la doctrina moral cristiana exige una determinada conducta con respecto al uso de los bienes de la tierra en la cual la idea de propiedad cumple un papel central; el respeto a la propiedad ajena, el deber de socorrer a los necesitados por parte de los que poseen y otras muchas cuestiones análogas exigen que los moralistas se ocupen de la doctrina de la propiedad, establezcan una noción de este derecho real y se ocupen de los modos de adquirirlo y de sus vicisitudes jurídicas, con el fin de orientar la conciencia de los fieles, a la hora de ejercer los derechos que el ordenamiento secular les atribuye.

b) La propiedad es, además, un tema estrictamente técnico en el campo, más reducido y concreto, del Derecho canónico. En la Iglesia, ya lo hemos recordado antes, están vigentes una serie de normas ju-

17. Ibid. 23-24.

18. Vid. J. TONNEAU, *Propriété*, v. «Dictionnaire de Théologie catholique».

19. Vid. la clara exposición de B. HAERING, *La ley de Cristo*, trad. española, 2 (Barcelona 1961) 392-506. En este libro puede encontrarse citada abundante bibliografía sobre el tema.

20. I-IIae q. 95 a. 2 c.

rídicas que regulan, con independencia del Derecho del Estado, aquellos aspectos de la vida social que se refieren al fin ultraterreno de la sociedad eclesiástica. Este ordenamiento jurídico ha regulado un tipo de propiedad, la llamada propiedad eclesiástica, que constituye un aspecto fundamental del Derecho patrimonial canónico. De aquí que los canonistas hayan tenido que utilizar frecuentemente el concepto de propiedad en su labor de interpretación de los textos legales de la Iglesia.

Estos dos aspectos de la cuestión están íntimamente relacionados. En primer lugar, la conexión surge por razones estrictamente doctrinales. La doctrina de la Iglesia sobre la propiedad como institución de Derecho natural constituye la base y fundamento de sus normas positivas sobre la propiedad eclesiástica; es más, el Derecho natural en el sentido que a esta expresión atribuye la doctrina tradicional de los teólogos y canonistas, forma parte del ordenamiento canónico, es Derecho vigente en la Iglesia ²¹. De aquí que las nociones sobre el tema elaboradas por teólogos y moralistas sean, en fin de cuentas, las mismas que utilizan los canonistas en su labor de exégesis de las leyes de la Iglesia ²².

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que los dos aspectos de la cuestión a que nos estamos refiriendo, y que con los criterios científicos actuales pueden distinguirse con verdadero rigor, no están tan claramente delimitados en otros períodos históricos y precisamente en aquellos en los que la doctrina de los moralistas y canonistas realizó sus más decisivos avances. Distinguir entre una doctrina mo-

21. Sobre el Derecho natural en el ordenamiento canónico vid.: DEL GIUDICE, *Canonizatio*, separata de «Scritti giuridici in onore di Santi Romano» (Padova 1939); ID., *Diritto naturale e diritto positivo*, «Il diritto ecclesiastico» 61 (1950) 318-326; A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici* 2 (Mechiniae-Romae 1945) 49-62; P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico, Parte generale* (Padova 1943) 68-73; G. OLIVERO, *Diritto naturale e diritto della Chiesa*, «Il diritto ecclesiastico» 61 (1950) 1-41; E. DI ROBILANT, *Significato del diritto naturale nell'ordinamento canonico* (Torino 1954). Vid. también los trabajos cit. en la nota 1. Para el estudio del Derecho natural en relación con el tema de los principios generales del Derecho vid. P. FEDELE, *Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata*, separata de «Studi Urbinati» 10 (1936); en sentido contrario: ANNA RAVÁ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica* (Milano 1954).

22. Precisamente por este carácter de doctrina general, abierta a los problemas que plantea el bien común temporal, que tienen las construcciones doctrinales de inspiración católica sobre la propiedad, el tema no se considera estrictamente canónico y no es habitualmente objeto de atención por parte de los canonistas. El único manual moderno de Derecho canónico que se ocupa con amplitud del problema es el libro del Prof. M. GIMÉNEZ

ral sobre la propiedad en general cara a los problemas de conciencia y a las relaciones jurídicas típicamente temporales y una doctrina estrictamente canónica sobre el mismo tema hubiera sido una tarea sin sentido en otros períodos históricos, en los que ambas cuestiones están estrictamente relacionadas: en la Edad Media los cuerpos legales canónicos no se ocupan sólo del orden interno de la sociedad eclesiástica, sino que son también instrumentos de la acción civilizadora de la Iglesia en cuestiones típicamente temporales²³. Unase a esto la

FERNÁNDEZ, *Instituciones jurídicas de la Iglesia Católica*, 2 (Sevilla 1942) 1-113. Ello es debido al peculiar enfoque que el ilustre profesor de la Universidad de Sevilla ha dado a su obra, en la que —como él mismo nos advierte— no se limita a «exponer los principios fundamentales del Derecho canónico, sino también el concepto canónico, o sea el de la Iglesia católica, sobre los problemas jurídicos fundamentales, es decir, sobre las Instituciones jurídicas más interesantes y por ende sobre sus postulados doctrinales. Y como las Instituciones jurídicas más interesantes para los juristas son aquellas entre las que vivimos, examinaremos en cada caso las más recientes enseñanzas del Magisterio de la Iglesia sobre aquellas doctrinas filosóficas y sociales, inspiradas en las actuales realizaciones de los pueblos cultos». Cfr. op. cit., 1 (Sevilla 1941) 6-7. Vid. también: P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Les principes sociaux du Droit canonique contemporain* (Paris 1939) 72-88.

23. «El Derecho canónico —ha escrito el Prof. J. MALDONADO— ha seguido un proceso especial de evolución que le ha llevado a ser de un ordenamiento que abarca una materia varia y multiforme, tanto religiosa como temporal, a constituir, en su último (por ahora) estado de evolución, un Derecho exclusivamente eclesiástico y que incluso se remite al Derecho del Estado para aquellas materias, como los contratos, en los que estima que puede bastar con el mismo». Cfr. *La técnica de investigación histórica del Derecho canónico*, «Investigación y elaboración del Derecho canónico» (Barcelona... 1956) 158-159.

El mismo autor nos explica las razones del fenómeno: «La autoridad de que la Iglesia ha gozado, la mayor autoridad del mundo y la perfección técnica que llegó a alcanzar su Derecho han sido reconocidas a través de la Historia y han originado el hecho de que, sobre todo en momentos en los cuales el Derecho del Estado era rudimentario y poco respetado, la legislación canónica extendiera sus ramas por zonas que hoy habrían de parecer propias de éste. Porque además, el Derecho canónico, en su extensa evolución histórica no interrumpida, ha asistido al nacimiento, evolución y muerte de sistemas jurídicos seculares y así ha convivido con ordenamientos jurídicos en todos los grados posibles de evolución. Por todo ello sucedió que muchas instituciones que hoy se atribuyen exclusivamente al Derecho del Estado fueron reguladas con detalle en los cuerpos legales canónicos y trabajadas con esmero por la canonística. Así han sido reglamentados por el Derecho canónico las relaciones entre el poder político y los súbditos y los principios de elección del soberano, todo el Derecho de familia, gran parte del de sucesiones y el de personas y aun muchos aspectos del de cosas y contratos, las relaciones internacionales y la guerra, y el castigo de muchos delitos que hoy son objeto del Derecho penal secular» (op. cit. 158). «En las *Decretales* —añade, señalando un típico ejemplo— se dedicaban a la materia de contratos los títulos 14 al 24 del libro III, mientras que en el *Codex Iuris Canonici* el canon 1529 se remite para esta materia al Derecho Civil» (op. cit., 159 n. 6). Vid. también F. J. DE AYALA, *El Derecho canónico y la idea de interés*, «Revista española de Derecho canónico» 3 (1948) 264.

A este hecho se refiere, sin duda, RADBRUCH, cuando a propósito del «*Codex iuris canonici*» hacía notar que «ya no se quiere crear un Derecho eclesiástico para el mundo, sino tan sólo un orden jurídico para la Iglesia». Cfr. *Introducción a la Ciencia del Derecho*, trad. española (Madrid 1930) 210. No se trata, sin embargo, de una renuncia por parte de la Iglesia a su potestad y deber de interpretar el Derecho divino natural y positivo, con respecto a toda clase de cuestiones; observamos simplemente una evolución de las moda-

consideración de la base común técnica del Derecho romano en las escuelas medievales, la extensión de la competencia de los tribunales de la Iglesia a muchos conflictos sobre bienes temporales como consecuencia del privilegio del fuero y la identidad de aspiraciones éticas en ambos derechos (*utrumque ius*) en los períodos históricos en los que sociedad occidental y cristiandad son la misma realidad y fácilmente nos damos cuenta de la estrecha relación entre dos aspectos de la cuestión que en estricta doctrina científica pueden y deben distinguirse.

Así las cosas ¿cuál es la noción jurídica de propiedad que manejan los canonistas y moralistas? Sus fuentes son, por una parte, la doctrina cristiana sobre el uso de los bienes terrenos, recogida en los libros del Nuevo Testamento y elaborada por la doctrina de los Santos Padres; por otra parte, los conceptos técnicos del Derecho romano justinianeo en su elaboración medieval. De este aspecto del tema, se ha ocupado el canonista francés Charles Munier en su ponencia sobre el tema "*Dominium et Proprietas chez les canonistes et les moralistes du XVI^e siècle*" ²⁴.

3) *La propiedad en el ordenamiento de la Iglesia.*

Los canonistas, al estudiar el tema de la soberanía de la Iglesia se basan en la doctrina de la "sociedad perfecta", es decir, aquella "quae bonum in suo ordine completum tamquam finem habens, ac media omnia ad illud consequendum iure possidens, est in suo ordine sibi sufficiens et independens, id est plene autonoma" ²⁵. De esta noción se derivan tradicionalmente en la doctrina canónica dos fundamentales consecuencias que nos pueden servir de base para la sistemática de este estudio. "Come *societas iuridice perfecta* —ha escrito el Profesor D'Avack—, la Chiesa è per i canonisti non solo un'organismo giuridico unitario e autonomo, ma anche un vero e proprio *subiectus iuris*,

lidades técnicas de su ejercicio. Como consecuencia de razones de diversa índole, que no es ahora posible analizar, la Iglesia ejerció en otros períodos históricos su acción espiritualizadora con respecto a las cuestiones jurídicas temporales por medio de los cuerpos legales canónicos; en la actualidad lo hace a través de los documentos magisteriales, especialmente las modernas Encíclicas.

24. La trad. castellana de esta ponencia se publica en el presente fascículo de IVS CANONICVM.

25. OTTAVIANI, *Institutiones*... I cit. 46.

una persona giuridica”²⁶. Fácilmente puede establecerse la relación entre estas dos consecuencias de la condición de *societas perfecta* que los canonistas atribuyen a la Iglesia y el tema de la propiedad. En cuanto la Iglesia es un organismo jurídico unitario y autónomo, la propiedad nos aparece como una institución regulada por sus normas y tutelada procesalmente; en cambio, la consideración de la Iglesia como persona jurídica nos lleva al estudio de la propiedad como un derecho subjetivo del que ella puede ser titular. Analicemos separadamente los dos aspectos de la cuestión.

El “Codex Iuris Canonici”²⁷ no contiene una descripción legal del derecho de propiedad; sin embargo, da por supuesta la existencia de este derecho en el ordenamiento de la Iglesia, como se desprende de numerosos cánones en los que se atribuye la capacidad de adquirir bienes y ser propietarios de los mismos a determinados entes eclesiásticos. En cuanto a la protección judicial de este derecho, puede encontrarse una minuciosa regulación de las correspondientes acciones en los c. 1667 y ss. En general puede afirmarse que el Codex da por supuesta la doctrina sobre la propiedad elaborada por los teólogos y moralistas, a la que ya hemos hecho referencia; su carácter de institución de Derecho natural está reconocido implícitamente en el c. 1499 § 1. También es necesario tener en cuenta que —“nisi iure divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur”— el Codex remite al Derecho estatal vigente en cada territorio en materia de obligaciones (c. 1529)²⁸, limitándonos a dar algunas normas especiales con respecto a determinados contratos²⁹. Esta actitud del legislador matiza, aunque sea indirectamente, todo el Derecho canónico en materia de propiedad;

26. *La Chiesa cattolica nel diritto canonico, ecclesiastico e internazionale*, separata de «Enciclopedia del diritto» vol. 6 (Milano 1954) 4.

27. Sobre el derecho de propiedad en el «Codex iuris canonici» vid.: R. NAZ, *Propriété (droit de)*, v. «Dictionnaire de droit canonique».

28. Vid. A. FUENMAYOR, *La recepción del Derecho de obligaciones y contratos operada por el «Codex Iuris Canonici»*, «Revista española de Derecho canónico» 4 (1949) 295-306; G. WROMANT, *De applicatione canonis 1529*, «Ius Pontificium» 10 (1930) 120-125; J. PENDOLA, *De probationibus in iudicio ecclesiastico circa contractus juris civilis*, separata de «Monitor ecclesiasticus» (1949); P. LOMBARDÍA, *El canon 1529: problemas que en torno a él se plantean*, «Revista española de Derecho canónico» 7 (1952) 103-132; I. SPADA, *Sulla inapplicabilità del can. 1529 del C.J.C. alla costituzione delle persone morali canoniche* «Il diritto ecclesiastico» 73-I (1962) 160-187.

29. Vid. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, *Instituciones...* cit. 2 91-113. Especialmente significativo al respecto es el c. 1543 que regula el contrato de mutuo; vid. J. L. MASOT, *El canon 1543 en sus más inmediatos antecedentes legislativos* «Revista española de Derecho canónico» 7 (1952) 75-102.

en líneas generales puede afirmarse que el legislador eclesiástico renuncia a una regulación minuciosa de este derecho, remitiéndose ampliamente al Derecho del Estado, salvo en aquellos aspectos en que pueden estar empeñadas cuestiones de carácter doctrinal (criterio de la Iglesia en esta materia) o en cuestiones que afectan directamente a la estructura peculiar del patrimonio eclesiástico.

Esta parquedad legislativa en materia de propiedad que denota el Derecho vigente en la Iglesia, contrasta vivamente con la minuciosa atención que al tema prestan los documentos del Magisterio eclesiástico, al referirse a la propiedad privada y a su regulación por el Derecho del Estado. La razón es, sin embargo, evidente. La Iglesia reclama para sí la misión de interpretar el Derecho natural y, por tanto, de establecer criterios sobre cuestiones jurídicas fundamentales que afectan al orden de las cuestiones temporales; sin embargo, su *potestas iurisdictionis*, en virtud de la cual se dictan las normas de Derecho contenidas en sus leyes, se extiende solamente a aquellas materias que están relacionadas con el fin sobrenatural, ultraterreno, de la salvación de las almas³⁰. La propiedad privada es una cuestión temporal: afecta a la regulación jurídica del señorío de los hombres sobre los bienes del mundo en orden a la satisfacción de las necesidades terrenas. De aquí que la Iglesia reclame sobre esta materia la misión de intérprete del Derecho natural, pero no la competencia de establecer normas de Derecho positivo. La propiedad solamente es objeto de regulación de las normas canónicas positivas cuando está dirigida al fin sobrenatural del hombre, es decir, cuando se trata de disciplinar el régimen jurídico de la propiedad sobre bienes cuyo destino tiene un carácter religioso o espiritual.

Estos bienes pueden clasificarse en dos grupos fundamentales: a) los bienes que son propiedad de particulares, pero a los que la Iglesia atribuye un carácter sagrado; b) los bienes que integran el patrimonio eclesiástico.

El Derecho canónico atribuye a determinados bienes (cementeros, edificios de culto, objetos litúrgicos, etc.), la condición de cosas sagradas, "*res sacrae*"³¹. Estos bienes son objeto de unos ritos de carác-

30. Vid. sobre esta cuestión, tratada en todos los manuales de «*Ius publicum ecclesiasticum*»: OTTAVIANI, *Institutiones...* cit. I 200-230.

31. Vid. M. PETRONCELLI, *La «deputatio ad cultum publicum»* (Milano 1937); A. MORONI, *Contributo allo studio sulla «deputatio ad cultum»* (Milano 1954).



ter religioso mediante los cuales se significa su apartamiento de los usos profanos y su destinación al culto (consagración y bendición). Como consecuencia de esta destinación su uso queda sometido a un régimen jurídico especial ³².

La mayor parte de estas cosas sagradas son propiedad de los entes eclesiásticos, y, por tanto, el régimen jurídico del dominio sobre ellas queda regulado en su totalidad por el Derecho de la Iglesia, de acuerdo con las normas y principios de que habremos de ocuparnos en el apartado siguiente; del carácter sacro de la cosa se derivan en todo caso unas limitaciones de los derechos dominicales del propietario, ya que éstos han de ser ejercidos de manera coherente con el destino cultural del objeto.

Sin embargo, el Derecho canónico admite también la posibilidad de que las cosas sagradas sean propiedad de los particulares: personas físicas o jurídicas no eclesiásticas (c. 1150, 1510). Nos encontramos en este caso con una regulación por parte del Derecho canónico, no de la propiedad en cuanto tal, sino solamente de aquellas facetas de los derechos dominicales que están relacionadas con la condición sacra de la cosa; de este régimen jurídico especial se derivan unas limitaciones establecidas por las normas canónicas de una propiedad basada en el Derecho natural y que, según el criterio de la Iglesia, puede ser regulada por el Derecho estatal en cuanto no perjudique su competencia en lo que se refiere al carácter sacro del objeto.

El principio fundamental del Derecho canónico sobre este punto está contenido en el c. 1150, en el cual se establece que las cosas consagradas o bendecidas con bendición constitutiva deben ser tratadas reverentemente y no pueden ser empleadas para usos profanos o impropios de su concreta función de culto. Por tanto la condición sacra de la cosa, como ha señalado con gráfica expresión el Prof. Del Giudice, "comprime ma non distrugge il diritto di dominicalità" ³³.

Las cosas sagradas son transmisibles a título tanto gratuito como oneroso, pero en este segundo caso la contraprestación ha de compu-

32. Sobre el régimen jurídico de las «res sacrae» vid., además de la bibliografía cit. en la nota anterior: A. GALANTE, *La condizione giuridica delle cose sacre* (Torino 1903); G. FORCHIELLI, *Il diritto patrimoniale della Chiesa* (Padova 1935) 143-170; V. DEL GIUDICE, *Nozioni...* cit. 330-336.

33. *Nozioni...* cit. 331.

tarse teniendo en cuenta solamente el valor material de la cosa, nunca el elemento sacro que, en cuanto tal, es *extra commercium*. La violación de estas normas constituye la figura jurídica de la simonía³⁴ (c. 727, 728, 730), cuyos efectos están regulados en el Codex (desde el punto de vista que aquí nos interesa, c. 729). También admite el Código canónico la adquisición de cosas sagradas por prescripción (canon 1510).

El carácter típicamente real del régimen jurídico de las cosas dedicadas al culto lleva consigo lógicamente que las transmisiones de su dominio impliquen también el paso de las limitaciones a su nuevo propietario (c. 1510, § 1); las mismas limitaciones pesan también sobre el que adquiere en relación con ellas *iura in re aliena* (c. 1537).

El régimen canónico de las cosas sagradas se modifica sustancialmente con la pérdida del carácter sagrado que puede producirse por decisión de la autoridad eclesiástica o por determinadas modificaciones de la integridad de la cosa (c. 1170, 1200, 1305). En estos supuestos la cosa puede destinarse a usos profanos, pero pesa sobre todos, hasta su total destrucción, el deber de no destinarlas a usos sórdidos (cánones 1187, 1510, § 1).

4) *La Iglesia como propietaria.*

De la noción de *societas iuridice perfecta*, que los canonistas han elaborado para estudiar el tema de la naturaleza de la sociedad eclesiástica en el campo del Derecho, se deriva la consideración de la Iglesia, no sólo como un organismo jurídico unitario y autónomo, cuyas normas constituyen un ordenamiento jurídico, sino también como un verdadero sujeto de derecho. De aquí que la Iglesia nos aparezca —con respecto al tema que nos interesa— no sólo como una entidad que regula mediante normas jurídicas la institución de la propiedad, sino también como un titular de este derecho. La sistemática del trabajo nos lleva ahora a ocuparnos de este aspecto de la cuestión.

El c. 1495, § 1 contiene una solemne proclamación de este derecho: “*Ecclesia catholica... nativum ius habet libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos*”.

34. Vid. A. BRIDE, *Simonie* v. «Dictionnaire de Théologie catholique».

A la hora de analizar técnicamente este texto es necesario poner de relieve unos aspectos fundamentales: la Iglesia Universal se considera persona jurídica (c. 100, § 1), y por tanto, con capacidad de ser propietaria por Derecho divino. Por otra parte, la doctrina tradicional canónica en los clásicos tratados de "*Ius publicum ecclesiasticum*", relaciona estrechamente esta condición de sujeto de derecho con la cualidad de *sociedad jurídicamente perfecta* que para la Iglesia se vindica³⁵, es decir, se le atribuye el mismo fundamento técnico que a la soberanía e independencia de la sociedad eclesiástica y a la potestad de dar leyes, sentencias o resoluciones administrativas. Toda esta construcción doctrinal nos hace ver de manera evidente que la condición de sujeto de derecho, y por tanto de propietaria, que la doctrina y legislación canónicas atribuyen a la Iglesia, se basa en los mismos fundamentos teológicos que justifican su existencia y su fin espiritual. La Iglesia reclama, por tanto, para sí la capacidad de ser propietaria, en tanto en cuanto esta cualidad es útil para el cumplimiento de su fin espiritual y, esta capacidad, apoyada en el Derecho divino, está indestructiblemente unida a su condición de sociedad soberana. De aquí que implique, junto a los derechos dominicales, la competencia para establecer mediante las normas de su propio ordenamiento el régimen jurídico de estos derechos. El derecho de propiedad que la Iglesia vindica para sí tiene dos claras vertientes. Una positiva: no es sólo un derecho a ser propietaria, sino además y al mismo tiempo, a legislar sobre esta propiedad y resolver jurisdiccionalmente los problemas que plantee. Otra negativa: sólo puede extenderse a aquellos bienes que cumplen la función de medio para la consecución de su fin. De aquí que la Iglesia en cuanto tal no pueda ser propietaria de bienes para la satisfacción de necesidades exclusivamente temporales y que su ordenamiento —es éste un aspecto sobre el que volveremos más adelante— no pueda regular la propiedad de personas físicas.

La eficacia de estos principios la advertimos con más claridad si analizamos con respecto a la propiedad de la Iglesia el significado del clásico *erga omnes* que los juristas utilizan para explicar el derecho de dominio.

35. Vid. OTTAVIANI, *Institutiones...* cit. 325-346; C. CICOGNANI, *Derecho de la Iglesia a la posesión de bienes temporales* «El patrimonio eclesiástico» (Salamanca, 1950) 9-14; P. FOURNERET, *Biens ecclésiastiques* v. «Dictionnaire de Théologie catholique».

La Iglesia se proclama propietaria con respecto a todos, frente a cualquier posible perturbador de su derecho. Y en concreto con respecto:

a) a los Estados. Y esto en un doble sentido: por una parte la Iglesia vindica frente a los Estados su soberanía en la esfera de la regulación de los negocios patrimoniales; por otra entiende que el Estado no puede desposeerla de sus bienes ni, según una opinión muy difundida, gravarlos con exacciones fiscales³⁶. Para cerrar este cuadro de posibles relaciones patrimoniales de la Iglesia con el Estado habría que referirse a la posibilidad de negocios bilaterales de tipo concordatario³⁷ y al deber que, según muchos autores³⁸, tiene el Estado de ayudar económicamente a la Iglesia en caso de que así lo exijan supremas necesidades de carácter espiritual. Estas contribuciones del Estado a la Iglesia tiene en algunos países el carácter de una obligación estrictamente jurídica, a título de reparación por despojos de los bienes eclesiásticos, en determinadas circunstancias históricas³⁹. No faltan tampoco canonistas que, en determinadas hipótesis de carácter extraordinario (guerras justas, calamidades públicas), admitan un correlativo deber de la Iglesia⁴⁰.

b) a los particulares (personas físicas y jurídicas). En este caso la Iglesia, como sujeto de derecho, realiza negocios de corte iusprivatista con los más diversos entes para la obtención de bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines. Muchos de estos negocios son a título oneroso, pero son frecuentísimos también los negocios a título gratuito *inter vivos* o *mortis causa*, mediante los cuales los fieles cum-

36. El problema de la inmunidad fiscal de los bienes eclesiásticos es objeto de controversias. La tesis que defiende esta inmunidad ha sido puesta al día recientemente por A. DUCAY. *La inmunidad fiscal eclesiástica* IVS CANONICVM 1 (1961) 479-500; entre los escritos que tienden a revisar esta afirmación vid.: M. GONZÁLEZ RUIZ, *La Iglesia y la legislación fiscal del Estado* «El patrimonio eclesiástico» cit. 191-216; G. DEL VALLE, *La legislación fiscal del Estado en relación con la Iglesia* ibid. 217-243; M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, *Instituciones...* cit. 121.

37. Vid. G. ZINGALI, *I rapporti finanziari fra Stato e Chiesa* (Milano 1943); A. DE LA HERA, *El régimen económico de la Iglesia en Austria* IVS CANONICVM 1 (1961) 535-544.

38. Cfr. entre otros, C. BRUNO, *El Derecho público de la Iglesia en la Argentina* 2 (Buenos Aires 1956) 231.

39. Así se reconoce expresamente, por ejemplo, en el art. 19 del Concordato español de 1953. Cfr. A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili* 2 (Vaticanis 1954) 279-280.

40. Cfr. entre otros A. OTTAVIANI, *Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici* 3 2 (Vaticanis 1948) 186-187.

plen el deber de contribuir a los gastos eclesiásticos ⁴¹. Junto a estos negocios (expresión de la condición de *subiectum iuris* que a la Iglesia se atribuye) el ordenamiento canónico proclama un derecho de soberanía fiscal, en virtud del cual la Iglesia tiene derecho a *exigir* a los fieles los medios necesarios para el culto divino, para la retribución de sus ministros y para los demás fines eclesiásticos (c. 1496). Contemplada desde esta vertiente la Iglesia no aparece sólo como un *subiectum iuris*, sino como una sociedad soberana. El ejercicio de esta atribución ha revestido diversas formas en cada período histórico y muestra en la actualidad una gran variedad, siguiéndose en cada país un sistema distinto. No faltan lugares (es más, esto es lo más frecuente) en los que estas exacciones tributarias se sustituyen por oblaciones voluntarias de los fieles o por dotaciones estatales ⁴².

c) a los entes eclesiásticos. Dentro del cuadro institucional de la Iglesia existen numerosas entidades (personas jurídicas) a las que se reconoce la capacidad de ser titulares de derechos patrimoniales. La actividad patrimonial de estos entes, en cuanto se relacionan con otros entes eclesiásticos, está regulada por el Derecho canónico. La autoridad eclesiástica no sólo dicta normas jurídicas para regular esta actividad y las aplica por medio de sus órganos judiciales y administrativos, sino que grava a sus patrimonios con diversos impuestos (c. 1504, 1355-1356, etc.). Este aspecto de la cuestión merece, sin embargo, un examen más detenido.

5) *El patrimonio eclesiástico: estructura.*

Aun cuando la doctrina canónica es unánime en admitir que la Iglesia Universal (es decir, la Iglesia, considerada como entidad unitaria) es un sujeto de derecho con personalidad jurídica fundada en el mismo Derecho divino y que, por tanto, tiene la capacidad de ser

41. Vid. R. BACCARI, *Le disposizioni di ultima volontà nel diritto canonico* (Bari 1946); J. VISSER, *De solemnitatibus priarum voluntatum in iure canonico* «Apollinaris» 20 (1947) 59-136; T. GARCÍA BARBERENA, *Las fuentes de Derecho privado del patrimonio eclesiástico* «El patrimonio eclesiástico» cit. 97-118; E. FERNÁNDEZ REGATILLO, *Problemas que plantea el canon 1513* ibid. 327-354; A. DE FUENMAYOR, *Problemas que plantean los cánones 1499 § 1 y 1513 desde el punto de vista civil* ibid. 355-384; J. MALDONADO, *Las causas pías ante el Derecho civil* ibid. 385-412.

42. Vid. L. PÉREZ MIER, *Fuentes de Derecho público del patrimonio eclesiástico: diezmos y primicias* «El patrimonio eclesiástico» cit. 43-64; ID. *Sistemas de dotación de la Iglesia católica* (Salamanca 1949); J. E. ALVAREZ ARANGO, *¿Diezmos u oblación personal?* (Medellín 1962).

propietario de bienes, sin embargo, este derecho no es ejercido prácticamente nunca, hasta el extremo de que sería imposible señalar algún bien concreto cuyo propietario fuese la Iglesia en cuanto tal. El Derecho canónico reconoce personalidad jurídica a numerosas entidades, bien por prescripción legal, bien por concesión de la autoridad eclesiástica (c. 100, § 1). Estas personas jurídicas, de muy diversa naturaleza, son las que en la práctica nos aparecen como sujetos de dominio de los llamados bienes eclesiásticos.

En los canonistas es frecuente hablar del patrimonio eclesiástico; sin embargo, este patrimonio, cuya concepción unitaria es perfectamente defendible desde el punto de vista científico, no corresponde a una determinada persona jurídica, sino que nos aparece fraccionada en multitud de patrimonios. El patrimonio eclesiástico es el conjunto de los bienes de la Iglesia y el Código de Derecho canónico nos advierte que se llaman *eclesiásticos* aquellos bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Santa Sede o a cualquier otra persona moral en la Iglesia. He aquí una tensión, presente en todo el Derecho patrimonial canónico, ante la unidad de los bienes eclesiásticos, concebidos todos ellos como medios para la consecución del fin de la Iglesia, y la variedad de los patrimonios de numerosas personas jurídicas propietarias.

El nexo de unión entre ambas realidades puede señalarse en la afirmación contenida en el § 2 del c. 1499: "*Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae, ad eam pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime adquisiverit*". El Dr. Hervada Xiberta, en la ponencia presentada a este Congreso, ha aclarado con notable precisión el sentido de ese canon, cuya interpretación ha dado lugar a muchas dudas y vacilaciones de la doctrina canónica⁴³.

6) *Disfrute de bienes eclesiásticos por personas físicas.*

La propiedad de los bienes eclesiásticos, afectados al fin de la Iglesia, no puede corresponder a personas físicas⁴⁴ sino a personas jurídicas. La razón es obvia. Se trata de bienes destinados, no a la satisfacción de necesidades inmediatas de la persona humana, sino a fines de la Sociedad espiritual que trascienden al individuo.

43. Esta ponencia se publica en este mismo número de IVS CANONICUM; en ella puede encontrarse citada la bibliografía fundamental sobre el tema.

44. Así lo ha hecho notar M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, *Instituciones...* cit. 2 121.



Sin embargo, las necesidades temporales de determinados hombres son satisfechas por los bienes eclesiásticos: estos hombres son los menesterosos, los religiosos y buena parte de los clérigos.

a) En los primeros siglos del cristianismo era frecuente denominar a los bienes de la Iglesia *patrimonium pauperum* y ello es un elo-cuente testimonio del hecho, por otra parte evidente, de que la Igle-sia siempre ha considerado la práctica cristiana de las obras de mise-ricordia como una de las finalidades a atender con su patrimonio ⁴⁵. En la actualidad nos encontramos con idéntico fenómeno y muchas de las personas jurídicas eclesiásticas tienen como fin atenciones asis-tenciales, que en definitiva redundan en la satisfacción de necesida-des temporales de los beneficiarios. Sin embargo, entre el beneficiario y el patrimonio eclesiástico no se suele establecer una relación de tipo jurídico, ya que esta ayuda es dispensada en actos de liberalidad, sin que la Iglesia esté vinculada jurídicamente a realizar cada uno de ellos, aunque tenga el deber genérico de cumplir este importante as-pecto de su fin.

b) Las religiones son sociedades de hombres y mujeres que viven en común y que se obligan mediante votos públicos a dedicar íntegra-mente su actividad a fines de carácter sobrenatural, apartándose del mundo y observando las virtudes evangélicas de la pobreza, la casti-dad perfecta y la obediencia; estas sociedades y determinados núcleos de su organización interna tienen personalidad jurídica (c. 531) y son propietarias de bienes, salvo algunas pocas que por exigencias de su tradicional espíritu renuncian a la condición de propietarias, tenien-do, en cambio, *iura in re aliena* sobre bienes cuya propiedad corres-ponde a la Santa Sede ⁴⁶. Estos bienes de las religiones se destinan en buena parte al sostenimiento de sus actividades: culto, apostolado, obras de misericordia, etc.; pero otra parte tiene como fin la atención de las necesidades temporales (alimento, vestido, alojamiento y cier-tos aspectos de la formación) de los religiosos. En este caso son perso-nas físicas las que disfrutan de los bienes eclesiásticos para satisfacer necesidades, que consideradas en su materialidad, pueden calificarse

45. Vid. sobre esta cuestión la citada ponencia de J. HERVADA y la bibliografía allí indicada.

46. Vid: CATHERINE CAPELLE, *Le voeu d'obéissance des origines au XII^e siècle* (Pa-ris 1959); G. ESCUDERO, *El voto solemne de pobreza* (Madrid 1955). En las págs. 11-19 de este libro puede encontrarse abundante bibliografía sobre el tema.

de temporales; sin embargo, la explicación de este fenómeno de manera coherente con las consideraciones antes expuestas es clara: a') el religioso por su separación del mundo y su consagración plena a Dios incorpora la totalidad de su actividad al ámbito de las realidades sobrenaturales, en las que se encuentra el único sentido de su vida y de sus acciones; b') por el voto de pobreza el religioso renuncia a sus derechos patrimoniales (con diversos matices jurídicos, según sus votos sean solemnes o simples, pero siempre con plenitud); de tal manera que el deber de la religión —y en último término de la Iglesia— a prestarles alimentos y asistencia se explica por razones, fuertes jurídicamente, pero que en manera alguna significan un derecho patrimonial de la persona física que pertenece a una religión.

c) Existen en la Iglesia unas personas jurídicas, denominadas beneficios, que a tenor del c. 1409 del Codex pueden definirse como entidades jurídicas constituidas con estabilidad por la competente autoridad eclesiástica, que constan de un oficio sagrado (un cargo de la organización de la Iglesia) y de un derecho en favor del titular a percibir las rentas de un patrimonio anejo al oficio. El beneficio es, por tanto, uno de los medios técnicos que conoce el Derecho canónico actual para atender a las necesidades del clero, en retribución al empleo de la actividad en servicio de la Iglesia. El sistema beneficcional no es el único que conoce el Derecho canónico vigente para atender a la retribución del clero, e incluso puede afirmarse que en la actualidad va perdiendo importancia⁴⁷; sin embargo, lo recordamos aquí, como ejemplo de instituciones jurídicas en las que se plantean este tipo de problemas, por la importancia histórica y legislativa de la institución.

Según las normas del Derecho canónico, el titular del beneficio tiene un "ius percipiendi" sobre las rentas. La cuantía de estas rentas a que se extiende el "ius percipiendi" queda fijada, de manera extrapersonal, sobre la base del efectivo valor de los frutos; sin embargo, en el Derecho beneficcional canónico se atribuye tradicionalmente un importante papel a un concepto subjetivo: la *congrua*; es decir, aquella parte de los frutos del beneficio que es necesaria para que se cubran decorosamente las necesidades personales del beneficiado. A tenor del c. 1473 el beneficiado puede disponer libremente de los frutos

47. Vid. L. PÉREZ MIER, *La adaptación del Derecho económico* «Teoría general de la adaptación del Código de Derecho Canónico» (Bilbao 1961) 238-257.

del beneficio que sean necesarios para su decoroso sustento; pero queda con la obligación de aplicar los sobrantes en favor de los pobres o de causas pías.

El problema fundamental que el Derecho canónico plantea en materia beneficial estriba en fijar la precisa naturaleza jurídica, tanto del "ius percipiendi" sobre los frutos de que habla el c. 1409, como de la obligación de aplicar en favor de los pobres o de causas pías el eventual excedente de la "congrua". Fácilmente se advierte la estrecha relación entre ambos problemas, cara a una explicación coherente del Derecho beneficial canónico.

No es posible, dada la brevedad del espacio de que disponemos, analizar aquí detenidamente las polémicas de los canonistas clásicos en torno a este tema ni los puntos de vista que se advierten en la doctrina actual. Nos limitamos, por tanto, a remitir con respecto a este punto a las ponencias de los Dres. Piñero Carrión y Reina Bernáldez ⁴⁸, que se han ocupado directamente del tema.

7) *Características de la propiedad eclesiástica.*

Después de este somero examen de los más importantes aspectos del Derecho de la Iglesia sobre la propiedad, sólo nos resta consignar las características más importantes de la propiedad eclesiástica.

Véamos que la Iglesia, a través de su potestad de Magisterio, establece el principio de que el derecho de propiedad de los particulares sobre los bienes temporales es de Derecho natural, y que por tanto los ordenamientos seculares no pueden desconocerlo; al mismo tiempo señala que la propiedad tiene que cumplir un fin social y, en este sentido, corresponde al Estado una función subsidiaria para superar los obstáculos que el egoísmo de los propietarios puede hacer surgir para el logro de este fin.

Por otra parte el Derecho canónico regula la propiedad de los bienes que están destinados a la consecución de los fines espirituales propios de la Iglesia. Como veíamos, aun cuando la Iglesia universal se considera como un sujeto de derecho con capacidad de ser propie-

48. Ambas ponencias se publican en este número de IVS CANONICVM. A ellas remitimos también para una información sobre la fundamental bibliografía.

tario, sin embargo el ordenamiento canónico reconoce la capacidad de dominio de numerosas personas jurídicas que de manera inmediata atienden los diversos aspectos del fin espiritual de la sociedad eclesiástica. Sobre cada uno de estos propietarios pesa la responsabilidad de la atención de sus fines específicos; sin embargo, la función que el Romano Pontífice cumple de supremo dispensador de los bienes de todos los entes eclesiásticos, constituye un eficaz elemento de unidad que asegura que el cumplimiento de los fines parciales de cada entidad propietaria no obstaculice el logro del fin supremo de la salvación de las almas, que la Iglesia en su conjunto persigue.

Aun cuando los fines de la sociedad eclesiástica son muy distintos de los de la sociedad temporal —y por tanto, han de ser distintas también las características de la propiedad que el Derecho canónico reconoce a las personas jurídicas eclesiásticas de la que los ordenamientos estatales reconocen a los particulares— es indudable que el Derecho canónico sobre el tema tiene un gran interés para los estudios de Derecho comparado. En él encontramos fórmulas jurídicas verdaderamente eficaces para lograr encauzar los derechos sobre bienes temporales hacia fines sociales de gran alcance, sin destruir el derecho de propiedad de personas físicas y jurídicas. De este modo se obtiene una viva atención a las necesidades inmediatas que repercute beneficiosamente sobre el conjunto de los intereses sociales. La utilidad que, tanto para el Derecho privado como para el Derecho público, puede obtenerse del estudio atento de la legislación canónica sobre la propiedad es, por tanto, evidente.

PEDRO LOMBARDÍA